

INICIATIVA SOBRE LA
DESIGUALDAD DE LA TIERRA

DOCUMENTO
CONCEPTUAL

LA GOBERNANZA COLECTIVA DE LA TIERRA

Y SU CONTRIBUCIÓN A LA REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

RUTH BAUTISTA DURÁN Y OSCAR BAZOBERRY CHALI

INTERNATIONAL
LAND
COALITION

UNITED
FOR LAND
RIGHTS

ipdrs
INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO RURAL
DE SUDAMÉRICA

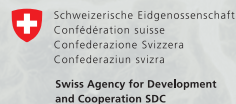
LA GOBERNANZA COLECTIVA DE LA TIERRA

Y SU CONTRIBUCIÓN A LA REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

SOCIOS ESTRATÉGICOS Y DONANTES PRINCIPALES



Government of the Netherlands



ISBN: 978-92-95105-56-0

RUTH BAUTISTA DURÁN Y OSCAR BAZOBERRY CHALI



El contenido de este trabajo se puede reproducir, traducir y distribuir libremente. Este trabajo no se puede utilizar con fines comerciales. Para obtener más información, comuníquese con info@landcoalition.org o consulte: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0>

Las opiniones expresadas en esta publicación son las de sus autores y los entrevistados para este informe. No se corresponden necesariamente con las posiciones oficiales de la ILC o el grupo de referencia de la Iniciativa. Publicación: noviembre de 2020. *Traducción:* Mariana Cristellys. *Edición:* David Wilson. *Diseño gráfico:* Federico Pinci.

ÍNDICE

LISTA DE ABREVIACIONES	6
RESUMEN EJECUTIVO	7
INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA	9
DISCUSIÓN Y ENFOQUES CONCEPTUALES SOBRE EL ACCESO COLECTIVO A LA TIERRA EN SUDAMÉRICA	11
Gobernanza de la tierra colectiva, justicia y desigualdad social	11
Estructuras de desigualdad	13
LEGISLACIÓN INTERNACIONAL Y NORMATIVAS NACIONALES SOBRE TIERRAS COLECTIVAS	15
Derechos de los pueblos indígenas	15
Derechos de los campesinos	16
Derechos de la población afrodescendiente	17
Reflexiones sobre el derecho internacional y las legislaciones nacionales	17
FORMAS DE ORGANIZACIÓN Y GOBERNANZA EN LOS TERRITORIOS COLECTIVOS	21
Territorialidades étnicas y autogobiernos ancestrales	21
Campesinos e indígenas en reservas, parques y áreas protegidas	23
Ocupación, asentamiento y comunidades migrantes	25
Asociatividad y acceso colectivo a la tierra	27
De la desigualdad a la gobernanza colectiva de la tierra	28

CONFLICTIVIDAD Y DESIGUALDAD PARA LA GOBERNANZA DE LOS TERRITORIOS COLECTIVOS	29
Derechos colectivos y desigualdad en el acceso a la tierra	29
Institucionalidad, proyectos de desarrollo y territorios colectivos	31
Defensa colectiva de las tierras y afirmación de autogobiernos	32
GESTIÓN TERRITORIAL COLECTIVA Y TERRITORIO, Y REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES	35
Experiencias de gestión colectiva y comunitaria	36
Las mujeres en los territorios colectivos	37
CONSIDERACIONES FINALES: LOS TERRITORIOS COLECTIVOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS GOBIERNOS PROPIOS	39
REFERENCIAS	41

LISTA DE ABREVIACIONES

ACIN	Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca
Acornecab	Asociación de Comunidades de Remanentes Negros del Área de Cabeceiras
Asomac	Asociación de Montubios Autónomos de Colimes
CONAQ	Coordinación Nacional de Articulación de las Comunidades Negras Rurales Quilombolas
Fedefruta	Federación de Productores de Fruta
FES	Función económica, social y ambiental
GTANW	Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis
ha	Hectárea
INAI	Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
Incora	Instituto Colombiano de la Reforma Agraria
Incra	Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria
IPDRS	Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica
Mabosinfron	Asociación Manejo de Bosques Sin Fronteras-Río La Novia
Ockil	Organización de Comunidades Kichwas de Loreto
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
Onamiap del Perú	Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú
PNIS	Parque Nacional Isiboro Sécore
RNFFT	Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía
TCO	Tierra comunitaria de origen
TIOC	Territorios indígenas originarios campesinos
Tipnis	Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécore
ZRC	Zonas de reserva campesina

RESUMEN EJECUTIVO

Este documento propone que la gobernanza colectiva de la tierra otorga derechos y contribuye a reducir las desigualdades en el interior de las comunidades, y las existentes entre estas, y la población e institucionalidad de su entorno.

Existen acuerdos internacionales amplios y disponibles respecto de los derechos campesinos, los derechos de los pueblos indígenas y la discusión sobre los derechos de la población afrodescendiente, que sustentan los derechos colectivos. Además, buena parte de la legislación nacional de los países sudamericanos incorpora los derechos colectivos a las principales categorías de tenencia de la tierra, sujetos agrarios y territoriales, y las vías de acceso a la tierra y territorios colectivos. Sin embargo, como se verá en casos específicos, los obstáculos suelen ser equivalentes o mayores a las declaraciones formales.

El bagaje reunido en la plataforma de casos inspiradores de acceso a la tierra y territorio del Movimiento Regional por la Tierra y Territorio (www.porlatierra.org/casos) rastrea las principales formas organizativas de la región y muestra los logros de la gobernanza colectiva de la tierra; también presenta los nodos problemáticos que determinan la desigualdad estructural que imprime la institucionalidad agraria y territorial, y el modelo extractivista. La conjunción de todos estos factores hace posible -o no- la redistribución y acceso a la tierra de campesinos, indígenas y afrodescendientes.

En el texto, se analizan varios casos de conflictos territoriales que obstaculizan el ejercicio de derechos colectivos normados internacionalmente e, incluso, constitucionalizados en varios países. También se estudian situaciones en las que se verifica la ausencia o controversias en la implementación de la consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas, comunidades campesinas y afrodescendientes para intervenir los territorios mediante megaproyectos de desarrollo, extracción minera e hidrocarburífera, y proyectos de energía e infraestructura.

El documento propone entender las micropolíticas rurales como una forma de conocimiento de las propuestas, y prácticas de autogobierno y autodeterminación. Mediante ejemplos de los diferentes países de la región, esta investigación muestra cómo, desde los territorios, se proponen formas de ordenamiento territorial, de ruralización de población tradicionalmente urbana, de ejercicio de los derechos individuales de las mujeres indígenas en el contexto de los derechos colectivos sobre los territorios, entre otros. Estas experiencias revelan la gobernanza colectiva de la tierra, unas veces en cooperación con el Estado, pero otras al margen o en oposición abierta a este, como una potente forma de encarar la desigualdad estructural, y reducir las inequidades sociales y las desventajas institucionales.

INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

El contexto rural sudamericano está determinado por la violencia contra los campesinos, indígenas y afrodescendientes. Pese al ascenso social, a las efectivas movilizaciones de las agrupaciones campesinas e indígenas, y a los logros legislativos y transformaciones constitucionales, persiste una amplia conflictividad en medio de condiciones de desigualdad en relación con la población urbana, y las élites nacionales y transnacionales. Esta situación muestra que el objeto en disputa para el desarrollo y la concentración de privilegios para unos son los recursos naturales, los territorios y las tierras de otros.

En este documento, se sostiene la hipótesis de que la gobernanza colectiva de la tierra constituye un mecanismo de asignación de derechos sobre el acceso, la ocupación y el aprovechamiento de recursos que contribuye a reducir las desigualdades en el interior de las comunidades, y entre estas y la población de su entorno.

Las formas de posesión colectiva de la tierra resuelven las problemáticas y circunstancias individuales y las expectativas según el género y la generación. Estos mecanismos comunitarios son más efectivos que los provistos por el Estado y lo que se espera de los mercados liberales de tierra.

La gobernanza de la tierra considera la base material de los recursos, su cualidad para ser transformada en alimentos, y en otros bienes de consumo individual y de acceso a mercado. También atiende una base espiritual presente en las comunidades indígenas y, además, en nuevas construcciones colectivas basadas en prácticas productivas y mercados locales. En el presente estudio, se repasará de manera breve la legislación vigente; además, se abordarán los conflictos territoriales y las estrategias adoptadas por las colectividades para acceder a la tierra, defender su territorio y reproducir sus formas de vida.

Sobre la metodología, será reflexiva y cualitativa. Se analizará el marco normativo internacional y de países sudamericanos, y se profundizará en el análisis de la plataforma de casos inspiradores de acceso a la tierra del Movimiento Regional por la Tierra y Territorio coordinado por el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS).¹ La problematización y las preguntas que organizan la exposición de las reflexiones se presentan a continuación:

- ¿Cuáles son las formas de organización y de gobernanza colectiva de la tierra, y cómo contribuyen a reducir la desigualdad en la distribución de tierras en contextos locales y nacionales?



¹ Iniciativa de articulación que busca sistematizar mil experiencias de acceso a la tierra y territorio de base campesina, indígena y afrodescendiente en Sudamérica. La plataforma ha superado los 200 casos, articulando a investigadores, activistas, instituciones, organizaciones en toda la región.

- ¿Cómo contribuyen los marcos legales, institucionales y normativos a las tendencias existentes en la gobernanza colectiva de la tierra?, ¿cómo se relacionan dichos marcos con las autoridades tradicionales y sistemas informales?
- ¿Quién ejerce influencia y en qué grado sobre la forma en la que se adoptan las decisiones relativas a la tierra?, ¿quién se beneficia y cómo?, ¿quién se beneficia del actual marco legal, institucional y normativo para el acceso y gobernanza de la tierra?
- ¿Qué tipo de conflictos se producen y cuál es su escalada de lo local a lo nacional o internacional?, ¿qué desigualdades develan estos conflictos?, ¿de qué recursos se dispone para gestionar las reclamaciones de los campesinos, indígenas y afrodescendientes?

1 DISCUSIÓN Y ENFOQUES CONCEPTUALES SOBRE EL ACCESO COLECTIVO A LA TIERRA EN SUDAMÉRICA

Gobernanza de la tierra colectiva, justicia y desigualdad social

De acuerdo con Palmer et al., *“la gobernanza de la tierra se refiere a las normas, procesos y estructuras a través de las cuales se adoptan decisiones relativas al acceso a la tierra y su uso, la manera en la que se ejecutan e imponen las decisiones, y la forma con la que se gestionan intereses contrapuestos relativos a la tierra”* (2009, p. 11). Se trata de una noción útil por la amplitud de aspectos, sujetos e instancias públicas que convergen para explicar las causas de la posibilidad o imposibilidad de acceder y poseer la tierra; es decir, no se reduce al análisis del ámbito formal de los Estados.

Para concebir a los gobiernos locales en los territorios como más eficientes administradores de la distribución y gestión de la tierra, requerimos asomarnos a la dimensión reivindicativa y a la dimensión de la gobernanza, y a los poderes políticos y económicos, que determinan, en última instancia, las estructuras sociales, sea que tiendan a la desigualdad o aspiren a la justicia social. El presente estudio se diferencia de otros por rastrear las prácticas colectivas, y la vigencia y potencialidad de las comunidades, y por reconocer a la población campesina, indígena y afrodescendiente como habitantes, sujetos y actores de una ruralidad dinámica.

Nuestro interés por estos sujetos sociales -mujeres y hombres- se relaciona con una postura específica sobre la desigualdad social; como lo explican Salas et al., deviene del debate entre una corriente liberal y una corriente crítica. Esta última señala que las desigualdades y la individualización se han naturalizado, pues *“encuentra en la vida en comunidad, los fundamentos de la igualdad social, y en la génesis y el desarrollo de la propiedad privada, el origen de la desigualdad social [y cuya] expansión conducirá a un ensanchamiento en las ‘brechas de equidad social’*” (2004, p. 12).

El desarrollo del capitalismo como sistema económico y político mundial incluyó una expansión mercantilista que estableció un sistema-mundo -en palabras de Wallerstein (1979)- y relaciones sociales basados en el colonialismo y la clasificación social (Quijano, 2000). Esta consideración es fundamental en el caso de Sudamérica y de otras regiones del mundo, ya que las poblaciones nativas fueron marginadas geopolítica y socialmente durante siglos.

En América del Sur, las brechas sociales son hasta radicalmente abismales. Las declaraciones y tratados internacionales coinciden en sus consideraciones sobre las actuales poblaciones nativas. Nosotros problematizamos la diferenciación cultural como criterio único o prioritario para determinar el acceso colectivo a la tierra, debido a que esta podría generar discriminación hacia otros grupos o colectividades sociales, o, incluso, hacia población culturalmente mestiza. Estas poblaciones étnicamente diferentes -aunque no siempre-, además de reclamar la posesión colectiva de la tierra como parte de su reivindicación cultural, lo hacen como una estrategia de protección del territorio.² Los sistemas colectivos de tenencia de la tierra y el territorio no están dados solo por las tradiciones y la cultura, sino que dinamizan la acción colectiva como parte de una estrategia política en momentos de riesgo por la tierra, el agua y otros recursos vitales. Existe una tendencia global, en ciertos ámbitos, a valorar y reconocer los sistemas de gobierno colectivo sobre los recursos naturales.

Ostrom (2015) afirma que los sujetos implicados con los denominados bienes comunes naturales son los mejores y más sostenibles gestores, porque disponen de medios, mecanismos para su implicación, y un criterio de justicia en la distribución de costos y beneficios.

Por supuesto, mientras estos sistemas colectivos y sus dinámicas se encuentren en disputa con el mercado y agentes privados, se suscitarán controversias y no habrá una forma de regulación infalible; por ello, es necesario un marco institucional de control. Sin embargo, ni las reivindicaciones políticas ni la legitimidad de la defensa de la sostenibilidad de los recursos naturales, propios de la gestión colectiva de la tierra, han repercutido de forma determinante en las legislaciones, de modo que permitan el acceso colectivo a la tierra de comunidades rurales -indígenas o no-, campesinas u otras. Desde el IPDRS, se plantean serias dudas de que los propios indicadores y medidores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tomen en cuenta estas formas colectivas de propiedad, bajo el rótulo de seguridad jurídica con énfasis en la percepción individual sobre la propiedad de bienes materiales y su libre disposición, entre ellos la tierra (Soliz et al., 2020).

2 Este sería el caso, por ejemplo, del pueblo comechingón, en Argentina, cuya revitalización de la identidad territorial, además de comprender la lucha por la tierra, contempla la afirmación de lo cultural, lo espiritual, lo económico, lo político, etcétera. Sobre este tema, véase el siguiente enlace: <https://porlatierra.org/casos/200>

Estructuras de desigualdad

El potencial de los recursos naturales en posesión colectiva ha sido objeto de disputa entre diversos actores con diferentes concepciones sobre el uso de la tierra y la propiedad. De manera general, los Estados dependientes de la extracción de bienes naturales han sido promotores de la confiscación de derechos originales de la población nativa. Las comunidades campesinas e indígenas con formas colectivas de propiedad han quedado en permanente desventaja; así, se han establecido estructuras de desigualdad institucional y social sobre el acceso a la tierra. Sin embargo, la población rural y las formas colectivas de gobernanza territorial siguen siendo importantes. Los fenómenos de migración son tan complejos, como la densificación urbana en muchos países de la región. A pesar de la dificultad estadística para medir nuevos fenómenos, como la doble o multirresidencia, el retorno, la ocupación de nuevas áreas por población expulsada a causa de la precariedad urbana o la población con varios oficios en el tránsito territorial rural-urbano, estos procesos evidencian una intensa vida rural. La iniciativa Rights and Resources (2015) estima que, en 9 de los 12 países de Sudamérica -lo que equivale al 92.9 %, de la superficie total regional-, el 20 % de la tierra se halla legalmente en manos indígenas y campesinas bajo sistemas colectivos de propiedad. Esta es una dimensión superior al promedio mundial, aunque las áreas con ejercicio de derechos consuetudinarios indígenas y campesinos seguramente es mayor.

Cuadro 1. Estadísticas de tierras asignadas y en propiedad por país en Sudamérica (los resultados no incluyen ni a Ecuador ni a Uruguay)

PAÍS	SUPERFICIE DEL PAÍS	TIERRA ASIGNADA		TIERRA EN PROPIEDAD		TOTAL DE TIERRA ASIGNADA Y EN PROPIEDAD	
	Millones de ha	Millones de ha	Porcentaje	Millones de ha	Porcentaje	Millones de ha	Porcentaje
ARGENTINA	273.67	5.29	1.9 %	2.74	1 %	8.03	2.9 %
BOLIVIA	108.33	0.47	0.4 %	38.92	35.9 %	39.39	36.4 %
BRASIL	835.81	77.19	9.2 %	114.63	13.7 %	191.82	23 %
CHILE	74.35	0.06	0.1 %	2.25	3 %	2.31	3.1 %
COLOMBIA	110.95	-	0 %	37.58	339 %	37.58	33.9 %
GUYANA	19.69	3.8	19.3 %	-	0 %	3.80	19.3 %
PERÚ	128	9.27	7.2 %	35.29	27.6 %	44.56	34.8 %
SURINAM	15.6	-	0 %	-	0 %	-	0 %
VENEZUELA	88.21	2.84	3.2 %	-	0 %	2.84	3.2 %
TOTAL	1,654.61	98.92	6 %	231.41	14.0 %	330.33	20 %
SUDAMÉRICA	1,780.88						
PORCENTAJE	92.9%						

Fuente: Rights and Resources Initiative (2015).

En relación con estos datos, hay que precisar dos temas. Por una parte, la gestión y gobernanza colectiva de la tierra no necesariamente corresponden a un tipo de propiedad o asignación formal; por ello, es probable que exista una subnumeración importante en la información disponible, más aún si se toma en cuenta la resistencia de los Estados, documentada por el Movimiento Regional por la Tierra y el Territorio, para formalizar la posesión colectiva y, peor aún, la propiedad colectiva. Por otra parte, los fenómenos de individualización -aceptados y adoptados por influencia de las instituciones públicas y los organismos multilaterales- no necesariamente han fracturado el control colectivo sobre las otras dimensiones y recursos de los territorios, ni la autogestión de las lógicas y particularidades del desarrollo de cada localidad.

No se puede asumir como suficiente reconocer formalmente la asignación de tierras colectivas, ya que estas conviven y disputan los recursos con otros intereses que no las diferencian de la fuerza pendular de los siglos XIX y XX.

Esta tensión entre enfoques e intereses ha frenado el avance del ejercicio de derechos colectivos y ha puesto en riesgo la sostenibilidad de estos sistemas, la reducción de la desigualdad, y el alcance adecuado del desarrollo económico y social.

Sostenemos una concepción del territorio en términos de gestión integral. Este concepto abarca la organización social, familiar y comunitaria, y la designación espacial de las actividades agrarias, pastoriles, forestales y de descanso con normas establecidas a través de la reproducción de la memoria histórica o de la institucionalización de las formas organizativas. Entendemos que estas son expresiones de autodeterminación y pueden comprenderse también como sistemas de autogobierno. Cuando este tipo de sistemas se concreta de manera efectiva y, además, puede dialogar con actores e instituciones de su entorno exterior -incluidos los Estados-nacionales, las empresas privadas u otros-, las comprendemos como formas colectivas de gobernanza de la tierra y el territorio.

2 LEGISLACIÓN INTERNACIONAL Y NORMATIVAS NACIONALES SOBRE TIERRAS COLECTIVAS

Derechos de los pueblos indígenas

La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (2007), luego del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (1989) y otros tratados y acuerdos internacionales, es categórica en su comprensión del momento y del proceso de resarcimiento a los pueblos indígenas por la discriminación histórica. Determina promover de sus derechos colectivos, *“especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos”* (ONU, 2007, p. 2), que incluyen formas de posesión y tenencia que no siempre conllevan procesos de legalización, titularización o propiedad para garantizar la sobrevivencia y reproducción de los pueblos indígenas. Se reconoce las instituciones políticas, jurídicas, económicas y sociales propias, y su libre determinación en el marco del Estado nacional, cuyo respeto es de interés y responsabilidad internacional.

En cuanto a la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, la declaración profundiza lo estipulado por el Convenio 169 de la OIT en cuanto a la celebración de consultas previas y a la cooperación de buena fe con los pueblos indígenas interesados a través de sus instituciones representativas (artículo 19). Además, incorpora el derecho consuetudinario y el respeto a sus propios sistemas jurídicos (artículo 34).

La mayoría de los países de Sudamérica ha ratificado la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y, aunque las poblaciones rurales se han apropiado del contenido de este documento con repercusiones positivas, persiste la conflictividad territorial.

Por ello, la movilización de las organizaciones ha generado una importante dinámica en el Sistema y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el desarrollo de jurisprudencia progresiva en la que se reconocen los derechos colectivos de los pueblos indígenas, principalmente en lo relacionado con la situación de sus territorios.

Otro instrumento que emerge de la discusión de Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible es el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (2018). El llamado Acuerdo de Escazú tiene el potencial de prevenir conflictos sociales referidos al medio ambiente a través del acceso a la información y a la justicia, y la participación pública en la toma de decisiones, como derechos fundamentales de todo ciudadano en cuestiones territoriales y ambientales.

Derechos de los campesinos

A fines de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, que incluye y reafirma aspectos de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, y se propone cumplir con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Aspira a reducir la desigualdad que enfrenta el sujeto de la declaración -los campesinos, campesinas y otras personas que trabajan en las zonas rurales- frente a otros actores y sus acciones en el ámbito rural, instituciones e instancias del mercado. Además, muestra preocupación por su agotamiento o envejecimiento, debido a la emigración de los jóvenes incentivada por la inviabilidad de sus agriculturas, y por los problemas en su acceso a la tierra, al agua, a las semillas y a otros recursos naturales. En respuesta a esta problemática, incorpora la noción de soberanía alimentaria, como complemento al derecho a la alimentación promovido por la FAO (artículo 15).

La declaración se muestra consciente de la violencia descargada contra este sector social, de los desalojos, de los desplazamientos forzosos (artículo 17) e, incluso, de la cantidad de suicidios de personas campesinas. En la definición del sujeto, amplía y supera el arraigo ancestral e identitario de los pueblos indígenas; establece un contexto de reconocimiento a lo que en esta investigación concebimos como una diversidad de *micropolíticas* (Rolnik, 2006) articuladas a la producción de alimentos en pequeña escala, aun aquellos que se consideran “sin tierra”, demandantes de tierra, e, inclusive, asalariados y migrantes. Empleamos el término *micropolíticas*, porque nos referimos a ámbitos de comprensión y disputa que son particulares en cada territorio; estos contextos están mayoritariamente relacionados con actividades como la agricultura, ganadería, pastoreo, pesca, silvicultura, caza y recolección, las cuales constituyen una identidad, la de campesinos y trabajadores rurales. Estas personas se encuentran en constante presión para transformarse en sujetos económicos, absorbidos por el sistema dominante de la agricultura, muchas veces diferente de sus propias expectativas; ello los coloca en una situación de permanente resistencia organizada.

En cuanto a la tierra y el territorio, además del resguardo de todos estos derechos y la prevención de la violencia, la declaración adopta una visión comunitaria, incluso en contextos en los que las poblaciones tienen la opción a retornar a sus tierras, por ejemplo, luego de conflictos armados. Recomendamos a los Estados llevar adelante reformas agrarias para permitir que las y los campesinos, y otras personas que trabajan en las zonas rurales accedan a la tierra e indica que se debe priorizar a los campesinos sin tierra, jóvenes y otros (artículo 17). Esta recomendación se extiende a los recursos naturales, explícitamente al agua, cuyo empleo preferente debe ser para la satisfacción de las necesidades humanas frente a otros usos y formas de explotación comercial de la naturaleza.

Derechos de la población afrodescendiente

El Decenio Internacional para los Afrodescendientes, 2015-2024,³ busca “promover el respeto, la protección y la realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de los afrodescendientes, como se reconoce en la Declaración Universal de Derechos Humanos” (ONU, 2014). Convoca a los Estados a reconocer su derecho a la identidad, a participar de la vida política, a desarrollarse, a conservar sus formas de organización, modos de vida, lenguas, etcétera, a mantener su propia estructura económica, “a administrar sus tierras y recursos naturales, incluidos los derechos de caza y pesca” (ONU, 2001, p. 15), y a tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

Se debe resaltar la importancia de la población afrodescendiente en Sudamérica, en algunos países con similares reivindicaciones que la población indígena originaria, y en otros países con relaciones de parentesco de larga data.

Sin embargo, sus reivindicaciones territoriales presentan particularidades que las diferencian de las de los pueblos indígenas y los campesinos.

Reflexiones sobre el derecho internacional y las legislaciones nacionales

Para comprender el derecho indígena, se debe considerar la historia ancestral, el trabajo agrícola y la perspectiva ante el extractivismo.

Así mismo, es necesario tener en cuenta que la vida campesina involucra una serie de actividades más allá del ámbito de la agricultura familiar y comunitaria: derechos de pertenencia, identidad, participación, acceso diferenciado a insumos, información, tecnología e, incluso, justicia en los marcos legislativos nacionales.

En ambos ámbitos -la vida campesina y el derecho indígena-, se considera que el ámbito de vida y desarrollo de las personas del medio rural y que viven en los territorios es el comunitario.

3 Este se debe a la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia realizada en Durban (2001), y a la adhesión universal a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965) y otros instrumentos internacionales.

En la propiedad colectiva de la tierra, existe una tensión permanente entre el derecho colectivo y el familiar. Una aproximación a la micropolítica permite comprender la combinación de derechos y distintos grados de disposición sobre la tierra y los recursos como condición para el ejercicio de la propiedad colectiva, así como las continuas adaptaciones al contexto. Se deben observar las modalidades colectivas de uso de recursos naturales, las que suelen generar estructuras verticales para un mayor control y eficiencia de lo colectivo. Más allá de la simple descripción, lo interesante es advertir su dinámica y potencial creativo para enfrentar diversas circunstancias.

Las tensiones se agudizan cuando, por ejemplo, existe una oferta por la tierra y los precios suben, o cuando las entidades públicas o privadas insisten en la titulación individual como garantía para acceder a hipotecas, seguros e, incluso, proveer infraestructura, como vivienda. Sin embargo, existen casos en los que los miembros de la comunidad renuncian a sus derechos individuales y entregan sus tierras a la colectividad. Esta situación muestra posibles escenarios en los que los derechos colectivos son fuente de protección contra terceros y, en muchos casos, un modo de lograr medidas para ampliar sus derechos y obligaciones sobre otros recursos, más allá del suelo cultivado.

Las legislaciones de los países sudamericanos establecen tipologías de acceso, propiedad y tenencia de tierras, y regulan formas de acceso y propiedad individual, colectiva y privada. A la vez, establecen mecanismos para verificar la función económica, social y ambiental (FES) de la tierra. Así mismo, contemplan la posibilidad de la reversión, compra y otras figuras que el Estado puede emplear para atender las demandas de la población campesina indígena; así, responden a la necesidad de redistribución. Aplican buena parte de los principios de las declaraciones internacionales de derechos humanos y pueblos indígenas; indican comprender las diferencias entre los campesinos colonizadores y los campesinos tradicionales y entre pueblos indígenas, pueblos originarios, y comunidades nativas y ancestrales.

En casi todos los países -y también en el razonamiento de las organizaciones multilaterales-, la propiedad colectiva se basa en las identidades y las demandas territoriales para pueblos indígenas preexistentes a la colonia. Por ello, en la mayoría de los casos, se atiende a la tierra colectiva como un asunto antropológico y cada vez más asociado a la biodiversidad y a los conocimientos tradicionales. Es importante sostener esta interpretación étnica de las tierras colectivas, pero también se debe considerar que existen otras demandas grupales que merecen atención.

La situación de los diversos países es por demás compleja y dispar.

La experiencia de la participación del Estado como regulador de los mercados de tierras indica que esta no deja mucho margen para solucionar las desigualdades de acceso a la tierra para campesinos e indígenas. Ello se debe a que no prima un posicionamiento del Estado como benefactor o defensor de derechos, sino como un actor más en el juego del mercado, en la mayoría de los casos, sin un criterio para lograr la equidad entre los diversos sujetos rurales: unos naturales, otros jurídicos, empresariales, asociativos, etcétera.

La importancia de revisar la catalogación de estos sujetos rurales en las legislaciones reside en que permite comprender cuál es el enfoque institucional que condiciona el acceso a la tierra y territorio. Si la legislación impone reconocer a las comunidades de diverso tipo, se está empleando una lógica economicista al requerirles que se modifiquen y conformen en asociaciones, por ejemplo, como condición para su acceso a la tierra.

Aunque se reconocen avances legislativos, estos no siempre implican una mejora en términos de redistribución de tierras. En la región, prima una ambivalencia: se reconocen derechos colectivos, pero, a la vez, se fomenta la concentración de la tierra.

Este complejo panorama nos lleva a afirmar la parcialidad de los Gobiernos: están comprometidos con el acaparamiento de tierras y el extractivismo, mientras dejan en una situación vulnerable a las propiedades colectivas reconocidas y tituladas; este proceder genera la incesante reproducción de una estructura de desigualdad.

3 FORMAS DE ORGANIZACIÓN Y GOBERNANZA EN LOS TERRITORIOS COLECTIVOS

La experiencia de sistematización del IPDRS muestra que existen, al menos, cuatro formas de acceso al derecho colectivo. Lo importante no es solo acceder a la titulación o poseer la tierra bajo figuras colectivas, sino los sistemas de asignación de derechos, y la pérdida de estos por decisión de convenciones y formas organizativas autogestionadas, independientes de los Estados.

La tierra colectiva y la posesión formal son apenas la base material sobre la cual se gestiona un conjunto de derechos y asignaciones. Estos son, a fin de cuentas, temporales, dadas las condiciones y la voluntad de los sujetos individuales o subgrupos que existen en su interior, como la familia.

Territorialidades étnicas y autogobiernos ancestrales

Las comunidades indígenas, ancestrales, nativas y originarias pueden estar suscritas o no a estructuras organizativas mayores, articuladas territorialmente o, más bien, de forma gremial y con miras a la negociación en grupo con los Estados. En la región andina, se habla de la reconstitución de naciones originarias. En Brasil, Venezuela y Perú, se han demarcado territorios indígenas, con lo que se aspira, en parte, a resguardar la existencia de bosques. No obstante, como muestran los territorios indígenas originarios campesinos (TIOC) en Bolivia y los resguardos indígenas en Colombia, prima la fragmentación: muchos de estos territorios son discontinuos e incluyen a terceros, grandes propietarios o empresas privadas. Sin embargo, este tipo de entidades territoriales cuenta con titulación, y un amplio margen para ejercer la jurisdicción propia, la cultura y la gobernanza de sus territorios.

En comunidades originarias como las del Jatun Ayllu Kirkiawi,⁴ en Bolivia, se realizan procesos y estrategias políticas que activan la memoria colectiva y los archivos históricos de las familias para validar la documentación colonial de sus antepasados ante la legislación agraria vigente, para hacer valer sus derechos colectivos y para acceder tanto a la titulación de su territorio como para aspirar a la autonomía indígena.



⁴ Para revisar la historia de este territorio, véase: www.porlatierra.org/casos/27. Véase también el documental Jatun kirkiawi nuqayku kayku kirkiawi: <https://www.youtube.com/watch?v=t0dKsZUMfyQ>

Ambos procesos requieren certificar la ancestralidad, aspecto que resultaría inconstitucional, pues la Constitución boliviana (2009) reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas y naciones originarias al Estado boliviano. Entonces, este no debería ser la instancia que certifique la ancestralidad o identidad de un pueblo demandante (Lero, 2014).

La nación Diaguita,⁵ en Argentina, atraviesa por un proceso de autorreconocimiento y revitalización étnica en la actualidad, que constituye la base de su reciente lucha por el reconocimiento legal. Es decir, al no poseer la memoria histórica y los archivos agrarios que ostentan los ayllus andinos, se apela al aprendizaje de formas organizativas y a un discurso esencialmente étnico para acceder a derechos territoriales, tal como lo indica la Ley 23.302 sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes de 1985, que crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) (García, 2018).

En los países andinos, los pueblos indígenas de los valles y del altiplano tienen una larga historia y participación en la vida republicana; distinta es la historia de los pueblos amazónicos, que viven procesos recientes de contacto y sedentarización. En Brasil, recurrimos al caso de los Pataxó,⁶ ubicados en el nordeste, entre las cuencas de los ríos João Tiba y São Mateus. Esta comunidad tiene una tradición seminómada y convivía con otros grupos étnicos hasta que la expansión agrícola la alcanzó e inició su lucha por permanecer en las riveras. Sus miembros se vieron forzados a asentarse y experimentaron procesos migratorios importantes. No obstante, un núcleo de la población desarrolló un movimiento indígena que rescata la cultura a través de escuelas locales, los rituales cíclicos y la permanencia territorial; estas acciones han permitido su reproducción como pueblo pese a las masacres y represión sufridas.

También en Brasil, las comunidades quilombolas presentan una de las experiencias y formas organizativas más interesantes. Actualmente son comunidades y grupos de comunidades que apelan a los movimientos de emancipación impulsados por los esclavos afrodescendientes.

Los quilombos se han apropiado del Convenio 169 de la OIT para lograr el reconocimiento de su autoidentificación y la posesión de sus territorios.

Según la Coordinación Nacional de Articulación de las Comunidades Negras Rurales Quilombolas (CONAQ), en Brasil existen al menos 2,847 comunidades quilombolas certificadas, 1,533 procesos abiertos en el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) y 154 comunidades tituladas (Giménez, 2018).

La Quilombola Cabeceiras,⁷ ubicada en el municipio de Óbidos, estado de Pará, obtuvo su regularización en 2000, con 17,189.7 ha tituladas a nombre de la Asociación de

5 Para revisar la historia de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Catamarca, véase: www.porlatierra.org/casos/179
6 Para revisar la historia de este pueblo, véase www.porlatierra.org/casos/89
7 Para revisar la historia de este pueblo, véase: www.porlatierra.org/casos/38

Comunidades de Remanentes Negros del Área de Cabeceiras (Acornecab); acoge a 610 familias quilombolas distribuidas en 11 quilombos. Los quilombos, como las propiedades comunitarias campesinas en otros países, son una propiedad colectiva que no se puede vender, arrendar o dividir. La titulación es compleja y larga, al considerarse a estos territorios como patrimonios culturales antes que estratégicos para el desarrollo y la lucha contra la desigualdad de una población importante de Brasil (Peters, 2016).

Este enfoque culturalista antes que agrario o territorial, pese a la titulación, deja pendiente el tema de la disputa de los recursos naturales de estos territorios ante otro tipo de actores, empresas, latifundistas o proyectos estatales.

Esta misma situación acontece con las comunidades nativas y originarias, y con los pueblos indígenas, que consiguen su titulación luego de luchar muchos años y cumplir numerosos requisitos; aun así, no logran garantizar el respeto a sus derechos colectivos. No obstante, la vivencia territorial cala hondamente en los campesinos afrodescendientes.

En varios de estos territorios indígenas, el Estado insiste en exigir planes de gestión y aprovechamiento de recursos. Sin embargo, cuando se requiere intervenir sus tierras con proyectos de extracción, de energía o de infraestructura caminera -principalmente-, son pocas las experiencias positivas de consulta previa, libre e informada, proceso contemplado en la legislación internacional y ratificado por las legislaciones nacionales.

Campesinos e indígenas en reservas, parques y áreas protegidas

Varios Estados en el mundo promueven la permanencia de los pueblos indígenas en áreas principalmente boscosas, declaradas reservas de biodiversidad, bajo la suposición de que estos no intervendrán estos ecosistemas de forma significativa e, incluso, que son parte de ellos. Además, existe un reconocimiento internacional claramente expresado en el último informe de la ONU sobre cambio climático (ONU, 2019); en este, se valora la capacidad de adaptación de las comunidades locales e indígenas a las modificaciones climáticas, y su papel en la protección de los ecosistemas, y, eventualmente, en la mitigación del cambio climático y la preservación de la biodiversidad.

La dificultad en muchas de estas zonas surge cuando ingresa población cuyo modelo de vida y producción no corresponde con el bosque. También es cierto que la población que sí podría habitar los bosques está permanentemente amenazada por otro tipo de actores y derechos. El caso de Perú es importante, pues sus territorios han llegado a sobreponer derechos forestales o mineros sobre los derechos agrarios o indígenas, por ejemplo.

La comunidad campesina de Santa Catalina de Chongoyape⁸ se encuentra en la provincia de Chiclayo, Lambayeque, al norte del Perú. Tiene más de 4,200 habitantes, quienes colectivamente poseen 42,412 ha de tierra del bosque seco ecuatorial. Esta es una organización con personería jurídica integrada por familias que habitan y controlan su territorio, y que, mediante la Constitución Política de 1993, recibió autonomía económica y administrativa sobre sus territorios, así como la imprescriptibilidad sobre la propiedad de la tierra. Por la vocación productivista de los Gobiernos de turno, el territorio se vio agredido por traficantes de tierras, mineros y taladores informales.

Por ello, la comunidad campesina Santa Catalina de Chongoyape, en 2001, decidió establecer sobre una superficie de 34,413 ha -el 86 % de su territorio- un área de conservación privada que otorgara seguridad jurídica a su territorio y potenciara las actividades económicas ligadas al turismo y la conservación de la naturaleza. Esta decisión transformó la estructura interna de la comunidad y consolidó un territorio colectivo; de este modo, dio paso a nuevas actividades económicas, la formación cultural y la conservación del medio ambiente (Reaño, 2017).

Otro proceso territorial que destacamos es el ocurrido con el Parque Nacional Isiboro Sécure (PNIS) en Bolivia, creado en 1965 con la lógica conservacionista de la época en la Amazonía sur, trópico y corazón del país. En la siguiente década, se inició la construcción del tramo caminero hasta el PNIS; con este, se produjo la consecuente colonización campesina de tierras que el Estado consideraba baldías, paradójicamente facilitada por la relación dada entre los asentamientos indígenas y los colonizadores. Como se intensificó la colonización, se cuestionó su naturaleza de parque nacional; no obstante, la demanda indígena daba por sentada esta calidad y, en 1990, se logró el cambio de denominación del área y el reconocimiento del territorio indígena. Recién en 1997, se obtuvo la resolución agraria con la extensión de área protegida/territorio indígena, y se consolidó como propiedad colectiva: tierra comunitaria de origen (TCO) Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).⁹ Alberga a la población multiétnica yuracaré, moxeño-trinitario y tsimán, y su representación organizativa, la Subcentral de Cabildos Indígenas del Tipnis, participa activamente en el manejo territorial de este espacio.

En el Tipnis, los pueblos indígenas comparten la gestión territorial con otros actores públicos y privados que deben respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas; estos, al mismo tiempo, respetan los límites de otro tipo de propiedades y el carácter de área protegida del territorio. El avance del área de colonización campesina, cuyo cultivo es la hoja de coca, ha traído conflictos de manera persistente; a esto se agrega el plan de construir una carretera que atravesase el Tipnis y comunique el centro del trópico con la Amazonía, lo que afectaría el curso de ríos y probablemente aumentaría la colonización campesina y la extracción de recursos naturales de forma legal e ilegal. La resistencia de

las organizaciones indígenas de este territorio a la construcción de la carretera supone un hito y un emblema para el movimiento indígena boliviano en los últimos tiempos.

El desencuentro entre campesinos e indígenas se ha dado en diversos países; aunque el caso boliviano es peculiar, al parecer, no son suficientes las diferenciaciones entre categorías económicas y étnicas, pues ambos sujetos rurales tienen acceso a tierras comunales. No obstante, los pueblos indígenas han logrado que se reconozca su posesión ancestral, así como su forma de vida y el aprovechamiento sostenible de los bosques.

Ocupación, asentamiento y comunidades migrantes

Las comunidades campesinas se diferencian entre las tradicionales y las conformadas a través de ocupaciones, asentamientos y toma de tierras; en muchos casos, estas últimas logran legalizarse gratuitamente, como en Bolivia; en otros casos, tienen plazos de compra al Estado, como en Brasil, Paraguay y Ecuador. Las comunidades más novedosas son las compuestas por desplazados e, incluso, campesinos desarmados en el contexto del Acuerdo de Paz en Colombia.

En Brasil, algunos asentamientos han adquirido un halo emblemático. Ese es el caso del Proyecto de Asentamiento Emiliano Zapata,¹⁰ creado en 2004 en el municipio de Uberlândia, al noroccidente de Minas Gerais, región sede de diversas transnacionales y empresas del sector mayorista de granos, como Cargill Agrícola, Algar Agro, Coca Cola, entre otros. Es uno de los once asentamientos conquistados por el Movimiento de Trabajadores sin Tierra, donde habitan 25 familias en un área de 645 ha. Su creación se debe a las políticas públicas orientadas a la Reforma Agraria, pues es un inmueble desapropiado. En el procedimiento, el asentamiento accede a un contrato de concesión de uso, construcción de viviendas, vías y servicios eléctricos; división de los lotes familiares; y estructuración. Los campesinos acceden a tierra, créditos para inversión, asistencia técnica y otros programas del Gobierno federal. Estos beneficios para las familias son irrenunciables; sin embargo, se debate la opción de acceder al título de dominio para tener una mayor seguridad familiar, solicitar créditos en el banco, entre otras oportunidades, vistas de forma sospechosa como una estrategia para arrebatar los esfuerzos de los sin tierra por la vía del endeudamiento (Montealegre, 2016).

Los asentamientos en Paraguay son peculiares, debido a la falta de disponibilidad de tierras. En el hoy asentamiento Che Jazmín,¹¹ la lucha por la tierra de las familias campesinas tomó casi 20 años de sus vidas. A fines de 2005, el gran propietario Silvestre Brae decidió ofrecer sus tierras al Estado.

⁸ Para revisar la historia de esta comunidad, véase: <https://porlatierra.org/casos/134/>
⁹ Para revisar la historia de este territorio, véase: <https://porlatierra.org/casos/91>
¹⁰ Para revisar la historia de esta comunidad, véase: <https://porlatierra.org/casos/91>
¹¹ Para revisar la historia de esta comunidad, véase: <https://porlatierra.org/casos/143>

Luego de haber recibido ofrecimientos de parte de brasileros, las vendió al Estado paraguay por 5'000,000 guaraníes por hectárea (aproximadamente USD 850/ha). Al enterarse de la transacción, los campesinos decidieron ocupar el predio y acampar en la entrada de la estancia. Llegaron a negociar con el exdueño mantener el nombre de Che Jazmín. En 2007, el Gobierno emitió la Resolución 5091/2007 de Mensura, Loteamiento y Urbanización del predio.

Existen casos desvinculados de procesos de compra estatal o reforma agraria, y relacionados, más bien, con la distribución de tierras fiscales según el interés del Estado. La comunidad de Soberanía,¹² en Cobija, en el norte amazónico de Bolivia, es peculiar por estar ubicada en el hito fronterizo con Perú. La comunidad ocupa una extensión total de 25,103.58 ha y colinda con tierras de producción forestal permanente al sur y el Perú al oeste. La población de la comunidad viene de la zona andina del país; son 90 familias, que han constituido una urbanización comunitaria. Soberanía se constituyó en 2001 por el interés del Estado de afirmar su dominio sobre el territorio nacional (Hauk, 2015). La titulación colectiva evitó la parcelación de la tierra y reforzó el control territorial de las autoridades campesinas.

En Colombia, las zonas de reserva campesina (ZRC) fueron creadas en el contexto del conflicto armado con la intención de resguardar a las comunidades campesinas tanto social como productivamente de la violencia y el narcotráfico en diversas zonas. La ZRC Cabrera,¹³ en el municipio de Cabrera, departamento de Cundinamarca, es un territorio nutrido por las aguas del Páramo del Sumapaz, a 144 km de la ciudad de Bogotá D.C. Las ZRC se consideran un *“baluarte de la defensa del derecho al territorio, de la protección socioambiental y de la producción de alimentos, de cierre de la frontera agrícola, contra la concentración de la propiedad sobre la tierra, y las presiones de cambio en su uso por proyectos minero energéticos, infraestructurales y de agrocombustibles”* (Fundación Semanario VOZ, 2013, citada por Colectivo Agrario Abya Yala, 2016b). La gestión es limitada, pues no puede centralizar los recursos estatales e internacionales para llevar a cabo los proyectos productivos, educativos y culturales, como lo hacen las asociaciones de cabildos indígenas. Sin embargo, se ha propuesto generar un desarrollo comunitario, social, territorial y humano autónomo.

En muchos de estos asentamientos, las autoridades y las propias leyes privilegian e incentivan la división de las propiedades para su ocupación y uso mediante la titulación individual. A nuestro criterio, aunque en este tipo de asentamientos la propiedad al final se convierte en familiar o individual, resaltamos que los largos procesos implican discusión, estrategias y acuerdos colectivos.

Y esta es, sin duda, una forma de gobernanza colectiva de la tierra en la que interactúan diversos actores e instituciones para determinar, en forma individual, la efectividad de las luchas colectivas.

Si bien los Estados pueden proponer mayor o menor apoyo en asistencia y servicios a estas comunidades, el esfuerzo principal y el proyecto fundamental es necesariamente comunitario. La producción agrícola, aun sea incipiente en sus inicios, anima a las familias a persistir en su apuesta por la tierra y, en definitiva, la construcción y funcionamiento de las instituciones -escuelas- y servicios -agua potable, energía eléctrica, riego, etcétera- de aprovechamiento colectivo son los que determinan la consolidación del asentamiento.

Asociatividad y acceso colectivo a la tierra

La asociación es una figura que, al parecer, se impone con las políticas de apoyo al emprendimiento productivo y la participación del Estado en el mercado de tierras. En Ecuador, existe el Fondo de Tierras, correspondiente al Plan de Tierras, política de redistribución del recurso, revertido a grandes propietarios, no a organizaciones naturales, campesinas o indígenas, sino a asociaciones productivas, criterio que determinó la creación de varias asociaciones. En algunos casos, este establecimiento se produjo fragmentando las organizaciones territoriales; en otras, cumpliendo un rol circunstancial; y, en otras, efectivamente alimentando emprendimientos productivos. La Asociación de Montubios Autónomos de Colimes (Asomac),¹⁴ en la provincia de Guayas, Ecuador, logró la garantía de posesión de 675 ha de la ex hacienda La Leopoldina en 2009. Al ingresar al Plan de Tierras, mediante el requisito de asociatividad, se les imponía actividades no previstas en su forma de redistribuir la tierra internamente. En 2011, el Estado declaró a la hacienda en utilidad pública y dispuso una nueva adjudicación. Al año siguiente, entregó a otra asociación 195.52 ha, de las cuales 150 ha estaban habitadas y trabajadas por 44 socios de Asomac. Hasta este momento, la asociación ha desplegado una serie de denuncias por violación a sus derechos; además, exige la reasignación de tierras para sus socios que no han accedido a la adjudicación y demanda que se reconozca una Reforma Agraria Campesina, Montubia y Solidaria, como propuesta propia.

En el Perú, la Asociación Manejo de Bosques Sin Fronteras-Río La Novia (Mabosinfron),¹⁵ en el departamento de Ucayali, fue creada con el objetivo de conservar un bosque primario continuo a sus cultivos agrícolas en la ribera del río La Novia, afectado por la tala ilegal y el uso inadecuado de sus recursos. Esta experiencia ilustra las estrategias de los campesinos e indígenas asociados en la zona de amortiguación del Parque Nacional Alto Purús -el de mayor extensión en ese país y con gran biodiversidad- para contrarrestar las actividades económicas extractivas en sus territorios. Los miembros de Mabosinfron demandaron la cesión de 6,000 ha de los bosques para fines de conservación y turismo, situación contemplada por la legislación peruana. En 2012, la asociación recibió en concesión por diez años 6,718.80 ha de bosques, donde generó un área propia para la producción agrícola (Reaño, 2016).

14 Para revisar la historia de esta asociación, véase: <https://porlatierra.org/casos/106/>

15 Para revisar la historia de esta asociación, véase: <https://porlatierra.org/casos/119/>

12 Para revisar la historia de esta comunidad, véase: <https://porlatierra.org/casos/54/>

13 Para revisar la historia de esta zona de reserva campesina véase: <https://porlatierra.org/casos/70/>

Como se mostró, la tendencia de las políticas públicas será la economicista; sin embargo, las asociaciones pueden tener otros enfoques, entre ellos, la lucha por acceder a la tierra, y la defensa y conservación de los territorios.

De la desigualdad a la gobernanza colectiva de la tierra

Las formas de organización y de gobernanza colectiva de la tierra sobrepasan los marcos formales y legales de la propiedad colectiva de este recurso. En el caso de los asentamientos, identificamos que, si bien la lucha por la tierra representa una acción colectiva con la finalidad de poseerla, la legislación impone mecanismos para individualizarla, sea por la idea construida por generaciones de campesinos que anhelan la “seguridad jurídica”, sea por el formato de las asistencias técnicas o crediticias, que se refieren a la unidad familiar. Además, la lógica del desarrollo todavía tiene el aliento de la industrialización: pretende incorporar al campesinado en la lógica moderna y concebirlo como fuerza de trabajo libre, como participante del consumo, y seguramente, ambiciona que no cierre sus opciones a dejar su tierra.

Las formas asociativas revelan la capacidad de negociación y de producción de estrategias de los campesinos e indígenas.

Por un lado, podría verse que la figura asociativa se impone a estructuras organizativas territoriales y, además, se impone a sujetos que ejercen sus derechos colectivos y se ven obligados a adquirir otro estatus de participación, el de la afiliación individual. Si no fuera porque los pueblos indígenas y comunidades campesinas suelen estar al tanto de las oportunidades legislativas -que incluso no se pensaron para ellos- y estratégicamente se propongan acceder a formas legales como el “área de conservación privada”, la figura asociativa podría leerse como un persistente desincentivo a la gobernanza colectiva de la tierra.

Respecto de los asentamientos, el promedio estimado de superficie por cada unidad de explotación para la agricultura familiar campesina en Brasil es de 24 ha por unidad; en Argentina, de 107 ha; y, en Paraguay, de 7 ha por unidad, lo que incumple lo establecido por el Estatuto Agrario de 2002: 10 ha como unidad mínima para el desarrollo de actividades productivas (Paredes, 2017). De acuerdo con la plataforma de casos de acceso a la tierra y territorio -porlatierra.org-, en la región, el tiempo promedio que toma el proceso de lucha o gestión por el acceso a la tierra y el territorio es de 17 años. Se hace evidente la existencia de una tendenciosa aplicación de las políticas agrarias, un desincentivo a la formalización de las tierras colectivas, y un inconsecuente enfoque respecto de la agricultura familiar, su aporte a la alimentación de la sociedad y su potencial para resolver la desigualdad en el acceso a la tierra.

4 CONFLICTIVIDAD Y DESIGUALDAD PARA LA GOBERNANZA DE LOS TERRITORIOS COLECTIVOS

Como intentaremos mostrar, la conflictividad tiene como causa la desigualdad que viven los diversos sectores rurales. Ponemos atención a la institucionalidad pública en los temas territoriales mediante ejemplos puntuales para evidenciar las limitaciones de las que adolecen los Estados actuales para cumplir con los criterios mínimos de la gobernanza de la tierra y, al menos, entablar a un diálogo mínimamente igualitario con los pueblos indígenas y comunidades campesinas. Estos, por su parte, no encuentran alternativas a través de la vía institucional oficial, sino, más bien, mediante el ejercicio de sus derechos y jurisdicciones.

Los conflictos se originan porque se subordina a la población rural y se subestima su aporte económico, político y social, además de que los diversos Estados mantienen una vocación extractivista y una postura favorable a los agronegocios.

Derechos colectivos y desigualdad en el acceso a la tierra

Uno de los focos más importantes de la conflictividad por la tierra y el territorio en la región se encuentra en la Patagonia, ancestralmente ocupada por el pueblo Mapuche, en lo que hoy es Chile y Argentina. En 2015, la comunidad mapuche Pu Lof,¹⁶ en Resistencia, departamento de Cushamen, Argentina, inició la recuperación territorial en disputa con la compañía del italiano Luciano Benetton. Al año siguiente, por orden del Poder Judicial, se detuvo a siete personas -entre mapuches y activistas- en un operativo policial.¹⁷ Frente a la inexistencia de una orden de desalojo, las familias retornaron a sus viviendas. Tras varios episodios de violencia y acusaciones de robo, la comunidad adoptó como estrategia emplazar en el paraje una escuela intercultural, según dicta la ley.

¹⁶ Lof significa ‘comunidad’ en lengua mapuche.

¹⁷ Entre ellas, se encontraba Facundo Jones Huala, quien tenía una orden de captura internacional por cometer “atentados” en Chile. Véase: <https://goo.gl/WrRgdF>

En ese contexto, desapareció el joven activista Santiago Maldonado. Entonces, se desató una gran ola de indignación y solidaridad, un pedido de habeas corpus y declaraciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, del Comité de las Naciones Unidas Contra la Desaparición Forzada, de Amnistía Internacional, entre otros. El Gobierno y sus medios de comunicación intensificaron la deslegitimación del pueblo mapuche por terrorismo y secesionismo. Entre tanto, el cuerpo de Maldonado fue encontrado sin vida y con signos de tortura (Wahren et al., 2018).

Se dieron procesos judiciales y amedrentamientos por parte de las instituciones públicas en el territorio. Los mapuches comparecieron ante los tribunales por una causa de usurpación y abigeato que, finalmente, fue desestimada por la Fiscalía (Sánchez, 2017). La empresa Benetton posee 900,000 ha de tierras; la recuperación de tierra de 20 familias ocupa apenas 500 ha. El Estado argentino ratificó el Convenio 169 de la OIT y ha titulado tierras indígenas; sin embargo, sus diversos Gobiernos centrales no han podido plantar una política en contra de la desigualdad en el acceso a la tierra a favor del pueblo indígena Mapuche, sus territorios y desarrollo propio.

En Chile, el pueblo Mapuche está sujeto a la política antiterrorista; la familia Benetton se permite reclamar políticas similares en Argentina (Cué, 2017), desoyendo las resoluciones de diferentes instancias internacionales. Estas instituciones, haciendo eco de las demandas indígenas y campesinas, afirman que la violación a los derechos colectivos son afectaciones a los derechos fundamentales de estos pueblos.

Aunque las políticas agrarias estén establecidas, en última instancia, es la voluntad política de los Gobiernos la que cuenta. La distribución dispar de la tierra y la estructura de desigualdad son la mayor evidencia de la falta de independencia de poderes en los Estados.

En Brasil, los datos del Incra indican que, desde finales de 2017, no se han establecido predios para más familias sin tierra. Al arribar Michel Temer al poder, la distribución de tierra se redujo a cero y se archivaron 66 proyectos de asentamientos campesinos que habían cumplido el procedimiento legal y esperaban la firma del Ejecutivo. Si no se implementa una política agraria, la tendencia es el aumento de la violencia (Pereira y Dourado, 2020). Por ejemplo, la Comissão Pastoral da Terra (2020) indica que, en 2019, hubo 29 asesinatos en conflictos rurales: 21 personas eran trabajadores rurales, sin tierra, y 8 eran indígenas. Así mismo, aumentaron los procesos de desalojo de tierras recuperadas, lo que afectó indígenas y quilombolas.

En el caso de Venezuela, la idea de refundar la nación y de lograr el autoabastecimiento generó grandes esperanzas en las poblaciones indígenas y otros colectivos de acceder a tierras y consolidar sus derechos. Sin embargo, en medio de la crisis económica, política y social del país, las invasiones y las expropiaciones de hecho han sido recurrentes, así como el incentivo del Estado para extraer recursos naturales en tierras indígenas. Esta situación va dejando un rastro de despojo de dimensiones similares a la guerra y desplazamientos forzados de Colombia.

Institucionalidad, proyectos de desarrollo y territorios colectivos

Las posibilidades de campesinos, indígenas y afrodescendientes para acceder a la tierra y el territorio son muy escasas. A nivel general, no se valora ni económica ni socialmente al sector campesino o indígena. En términos productivos, prácticamente todos los Estados apuestan por el agronegocio -los monocultivos de exportación- y el extractivismo minero, petrolero e hidrocarburífero; además, promueven la infraestructura para dar curso a estos modelos y sus productos. Este mismo entusiasmo no se aprecia en relación con la economía campesina, la agricultura familiar u otro tipo de sistemas económicos, los cuales, sin incentivo, no prosperan.

Existen evidencias sobre el perfil empresarial de diferentes ministros, cuya imparcialidad frente a temas agrarios y socioambientales resulta dudosa. En Chile, el ministro de Agricultura es el agroindustrial del Maule, Antonio Walker, quien fue presidente de la Federación de Productores de Fruta (Fedefruta), impulsor de la “*certeza jurídica*” sobre la propiedad privada de las aguas: posee derechos de aprovechamiento de agua de 20,000 litros/segundo. Estas situaciones parecen cotidianas en este país pues se conforman alianzas público-privadas que apelan a la filantropía y a la responsabilidad social empresarial (Páñez y Faúndez, 2019).

La exploración y explotación de hidrocarburos y petróleo constituyen otra fuente de conflictos. La Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía (RNFFT),¹⁸ en el departamento de Tarija, Bolivia, es un ejemplo de esta dinámica. Se creó en 1989 para frenar un proceso de deforestación y extracción ilegal de maderas preciosas, y resguardar 246,870 ha de bosque. La administración de la reserva es pública y reúne a 10 comunidades campesinas en la Subcentral de Comunidades Campesinas de Tariquía. En 2015, el Gobierno permitió que se realizaran actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas; pese a la demanda de llevar a cabo una consulta previa y a la denuncia de la represión, en 2018, se aprobó que la empresa Petrobras explorara y explotara los recursos hidrocarburíferos en la zona. La visibilidad alcanzada por la resistencia de las mujeres campesinas logró que se suspendiesen los proyectos. La lucha campesina está relacionada con sus terrenos productivos y con el cuidado de la biodiversidad que alberga otras formas de vida.



18 Para revisar la historia de este territorio, véase: www.porlatierra.org/casos/120

Defensa colectiva de las tierras y afirmación de autogobiernos

La conflictividad rural expone la desventaja de los territorios campesinos e indígenas, y las condiciones de desigualdad de estas poblaciones en el acceso a la tierra.

Sin embargo, existen ejemplos de resistencia a los embates del modelo capitalista y de lucha contra el desamparo institucional con modelos propios de vida.

La experiencia de los fundos de pasto en Brasil es interesante. Areia Grande,¹⁹ en el estado de Bahía, tiene una extensión de 76,182 ha para 366 familias de 4 comunidades. Se caracteriza por el uso colectivo de tierras sin cercas para el pastoreo de cabras, ovejas y ganado vacuno; el uso común es importante, pues los animales pastan colectivamente. Además, los integrantes de la comunidad se dedican a la apicultura: aprovechan la floración de la caatinga nativa y, así, garantizan su conservación.

En la década de 1970, se construyó la hidroeléctrica Sobradinho, que expulsó a 72,000 personas, la mayoría agricultores, en beneficio de agroindustrias abocadas a la producción de alcohol. Solo una comunidad de Areia Grande resistió el despojo y, al quebrar la agroindustria, esta resistencia permitió que el territorio sea retomado por otras comunidades. En 2004, el Banco do Brasil adquirió el derecho sobre los títulos de propiedad en las tierras de Areia Grande como pago a la deuda y judicializaron a los líderes comunales como invasores. Las empresas no acertaban en sus estrategias jurídicas, y los campesinos ya contaban con más de 3,000 cajas de abejas, y 13,000 cabezas de cabras y ovejas en el territorio. No obstante, invadieron; destruyeron casas, corrales y árboles centenarios en la caatinga; y ejercieron una dura represión. Los residentes acamparon en su propio territorio, y denunciaron los abusos, reclamaron sus derechos y enfrentaron la violencia. El Estado reconoció tanto la naturaleza pública de la tierra como la legitimidad de su ocupación tradicional. Luego, asesinaron a sus líderes y las comunidades se manifestaron en la capital del estado en busca de apoyo y medidas. Tras 10 años, el conflicto continúa; las comunidades consideran que están atrincheradas en su territorio y presionan a los diversos niveles del Estado para que cumplan con su legislación.

Esta lucha y la actuación de las instituciones públicas han producido que las comunidades de Areia Grande rompan cualquier lazo de dependencia o lealtad a los poderes locales, lo que ha generado un mayor aprecio a su autonomía y libertad (Ferreira y Rocha, 2017).

La disputa y defensa se reitera una y otra vez. En la masa amazónica, considerada un baluarte, también se agrade muchas veces a los indígenas y afrodescendientes, y también al aliento de la autonomía y al control territorial.

En Venezuela, encontramos otro ejemplo: los territorios ancestrales del pueblo Huottöja,²⁰ en el municipio Atures, estado de Amazonas, colindante al Parque Nacional Natural El Tuparro, de Colombia. En esta región, a causa del extractivismo minero, se ha presentado una grave situación de inseguridad, conflictos socioambientales e impacto ambiental en todo el estado de Amazonas. En 2013, el pueblo Huottoja se planteó como una “jurisdicción especial indígena de control y gestión, no solo del territorio, sino de administración de justicia”. Demandan el reconocimiento de las instituciones del Estado, el ejercicio de su gobierno y derecho propio, junto con la garantía de la autodemarcación del territorio Huottoja (Aguilar, 2017).

Es cierto que este tipo de procesos no deja de requerir el “reconocimiento” del Estado. Sin embargo, constituyen una práctica de libre determinación territorial e identitaria, como la nación Wampís, en la Amazonía peruana. Esta declaró, en 2015, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW)²¹ y ejerce su autonomía de hecho. En estos territorios, dicha potestad no emerge del reconocimiento y la dotación de seguridad jurídica, sino del aliento de sus poblaciones por el ejercicio de los derechos colectivos.

En Sudamérica, los Estados juegan un rol de arbitraje en la reprimarización de las economías y del modelo extractivista que se imponen en los territorios rurales, pero también, en su peculiar forma de ejercer sus gobiernos, las políticas agrarias y territoriales. Las fórmulas empleadas para la distribución de tierras devela un conflicto en la independencia de poderes: las instituciones públicas están comprometidas con las estructuras de desigualdad. En consecuencia -como resulta lógico-, la mayor disputa por la tierra y los recursos naturales eleva los índices de violencia sistemática aplicada a la población campesina, indígena y afrodescendiente.

Los procesos oscuros y manipulados -si no inexistentes- de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas son frecuentes. Así, el afán de los Estados por cumplir contratos con empresas multinacionales vulnera los derechos fundamentales de las poblaciones locales; por ello, los Gobiernos deben pulsar con las resistencias y vigiliaterritoriales que imponen las dirigencias, y liderazgos perseguidos y aminorados con represión.

32 19 Para revisar la historia de este territorio, véase: [www.porlatierra.org/casos/163](https://porlatierra.org/casos/163)

20 Para revisar la historia de este pueblo, véase: <https://porlatierra.org/casos/161/>
21 Para revisar la historia de la nación Wampís, véase: <https://porlatierra.org/casos/147>

El resultado de estos arduos procesos no solo se contabiliza en los índices de violencia y asesinatos de personas que defienden los territorios y recursos naturales. También se alzan voces y protagonismos que, ante las alianzas institucionales y jurídicas protectoras de las estructuras de desigualdad en el acceso a la tierra, se declaran independientes políticamente, autónomos territorialmente, y proponen el ejercicio de los derechos conseguidos y la autodeterminación.

5 GESTIÓN TERRITORIAL COLECTIVA Y TERRITORIO, Y REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

Quisiéramos finalizar esta revisión sobre la gobernanza de los territorios colectivos, campesinos, indígenas y afrodescendientes enfatizando algunas experiencias y reflexiones que se asientan en la necesidad de desestabilizar la idea de “*lo ancestral*” como única fuente tanto de estrategias étnicas de defensa territorial como de formas de organización. Si bien hemos mostrado procesos contemporáneos en los que estas prácticas surten efectos positivos para los fines de acceso y defensa territorial, quisiéramos arribar a algunos aspectos basados en la realidad. Este giro se debe a que una crítica importante a procesos como los de Ecuador y Bolivia -que suponían avances sustanciales al haber accedido al poder político sus movimientos rurales- es que fueron frenados en términos cuantitativos, lo que mostró la limitación del discurso étnico por el territorio en el ámbito de la política nacional.

Analizando algunas de las experiencias mostradas y de los conflictos abordados someramente, encontramos grupos sociales que, a contracorriente de la tendencia urbanista -determinante del destino de la mayor parte de la población, que opta por abandonar la vida en el campo, y engrosar las periferias y precariedades en las ciudades-, insiste en un proyecto de vida, personal y colectivo, diferente. Enfrentar una institucionalidad rígida y conservadora, y asumir el “*lenguaje reivindicativo*” es un proceso de autodeterminación importante.

Retomando el concepto de micropolítica, introducido como principio metodológico para la comprender la gobernanza de los territorios, también es importante recurrir a las distintas y dispersas prácticas para conocer los territorios en términos de su autonomía. Ello supone aproximarse a los grupos y abrirse a comprender “*la capacidad de operar su propio trabajo de semiotización, de cartografía, de injerir en el nivel de las relaciones de fuerza local, de hacer y deshacer alianzas, etc.*” (Rolnik, 2006, p. 60); es decir, requiere entender la singularización y el fortalecimiento del grupo no como aquella masa o contingente en resistencia, sino como un sujeto colectivo con capacidad de automodelación.

Nos referimos a la capacidad de operar la libre determinación no como un término que se reitera discursivamente, sino como una práctica que deviene del ejercicio de derechos; no solo en contextos de conflicto y defensa, sino para la construcción de proyectos territoriales propios, la soberanía alimentaria y, también, la soberanía política.

Solo en este nivel de libertad de vivir sus propios procesos, se generan balances y autolecturas en perspectiva y creatividad. El ejemplo mostrado del Fundo de Pasto Areia Grande en Brasil es un caso singular, pues su discurso de autonomía no se funda en el logro de una Constitución política o de la legislación agraria nacional, sino en los múltiples golpes que su lucha colectiva ha sufrido, y de los que se ha sobrepuesto gestionando la tierra de una comunidad para las otras despojadas. Estas decisiones -de gran envergadura para este núcleo social- activan no solo el discurso de la resistencia ante la agresión y desigualdad, sino también el de la autonomía y la ocupación territorial como un modelo posible en diferentes contextos históricos.

Experiencias de gestión colectiva y comunitaria

Entre las experiencias de gestión colectiva, pueden verse diversas estrategias para lograr seguridad jurídica, pero, además, para vislumbrar mejores condiciones vida. En el corregimiento El Porvenir, municipio de Buenos Aires, departamento del Cauca, Colombia, se encuentra el Consejo Comunitario de La Alsacia.²² A fines de la década de 1980, se produjo un desplazamiento a causa de la construcción de la hidroeléctrica La Salvajina. Pese a su tradición minera, uno de los grupos afectados empezó a trabajar con la empresa forestal. Al advertir que la población desplazada pretendía sus tierras, el propietario, Milo Sarria, dueño de alrededor de 2,500 ha, entre ellas, la finca de 550 ha en cuestión, ofertó este inmueble en Popayán al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) para que el grupo hiciera la solicitud de compra. El grupo se instaló como medida de presión para la negociación. En 1992, el Incora compró las tierras y la comunidad adquirió una deuda con el Gobierno del 100 % del valor, sin subsidio alguno, distribuida entre las familias, pero la propiedad era también colectiva. El grupo se organizó como empresa comunitaria y reunió a 63 familias afrodescendientes de acuerdo con sus necesidades y condiciones para producir según sus costumbres; es decir, hicieron caso omiso a la lógica de ordenamiento institucional, que no toma en cuenta las dinámicas comunitarias, su autodeterminación, e idoneidad para gestionar y planificar su territorio.

En Colombia, existen muchas experiencias que se identifican a sí mismas como campesinas, pero que tienen un origen étnico diferente. Esto explica porque las organizaciones y negociaciones con el Estado a inicios del siglo XX se realizaron bajo la concepción campesina; sin embargo, al profundizar en su historia y peculiaridades culturales, han desarrollado creativamente sus formas organizativas. En el Cauca, existen cabildos y resguardos que ostentan una diversidad de tejidos comunitarios, como las guardias indígenas; estas, además de vigilar el espacio contra la violencia armada, poseen una concepción del territorio que incluye aspectos espirituales, cosmogónicos y de armonía.



22 Para revisar la historia de esta comunidad, véase: <https://porlatierra.org/casos/73/>

Otros casos que no deben perderse de vista son aquellos considerados neorurales (Trimano, 2015). Se trata de personas que, sin tener historia o articulación con el ámbito del campo, deciden abandonar su rutina urbana en busca de mejores condiciones de vida. Es una suerte de revalorización del mundo rural para emprender iniciativas económico-productivas, pero también con el fin de acceder a un ámbito de crianza distinto para sus descendientes y de encontrar un tejido social diferente al de las ciudades al cual integrarse. En Argentina, la Cooperativa Cuchiyaco²³ es una pequeña comunidad de 13 jóvenes urbanos que compraron tierras en el pueblo Santa Vera Cruz, en La Rioja, a 15 horas de Buenos Aires. En esa ciudad vivían y ahí vendieron todo para apostar colectivamente por un proyecto de vida rural. Iniciaron la construcción de sus viviendas y la lucha por agua para desarrollar cultivos agrícolas. Extendieron la autonomía educativa de sus hijas e hijos a la idea de la autonomía alimentaria, y ahora son impulsores de la agroecología en la región; buscan articularse con ferias de comercio justo, y participan de las luchas campesinas y comunitarias por el recurso hídrico (Esteban, 2017).

Las mujeres en los territorios colectivos

Diversos estudios abordan las desigualdades y brechas de género en el ámbito rural.²⁴ Entre ellos, Carmen Deere et al. (2011) señalan que la discusión por lograr la igualdad de género pasa por la propiedad de activos y el acceso a las riquezas, y se aproxima a la tensión entre la propiedad individual y la propiedad colectiva. Si bien los pueblos indígenas defienden sus derechos colectivos, las mujeres también requieren hacer un monitoreo de los mecanismos del derecho colectivo y vigilar qué derechos se desprenden del matrimonio. La propiedad familiar incluye bienes como la tierra, pero, además, bienes y otros ahorros; no obstante, ante la multiplicidad de casos de familias monoparentales, las mujeres suelen quedar despojadas.

Las mujeres participan en la lucha por el acceso y defensa territorial, aporte que, al lograr la titulación o consolidación, no se reconoce.

Esto no ocurre en la comunidad 24 de Mayo,²⁵ en la provincia de Orellana, departamento de Loreto, Ecuador. Ahí, la Organización de Comunidades Kichwas de Loreto (Ockil) -que puede ser presidida por mujeres u hombres- organiza la asociación de mujeres indígenas kichwas Kallary Muskuy Warmi Wankurishca ('Antiguos sueños de mujeres Kichwas'). Mediante esta, hacen posible su proyecto de desarrollar cultivos libres de pesticidas y químicos, y comercializan sus cosechas a un precio justo (Alvarado, 2019).



23 Para revisar la historia de esta familia, véase: www.porlatierra.org/casos/141

24 Sobre el tema, véase el documento "Enfoques de género y prácticas de las mujeres rurales en Sudamérica": <https://sudamericarural.org/index.php/nuestra-produccion/exploraciones/exploracion/36>

25 Para revisar la historia de esta comunidad, véase: <https://porlatierra.org/casos/133>

Muchos supuestos se gestan sobre el protagonismo de las mujeres en los territorios indígenas; se trata de concepciones idílicas tanto de lo indígena como de las mujeres, preconcepciones ciegas a la necesidad de las mujeres indígenas de autodeterminarse de forma individual. Estas ideas utópicas siguen reproduciéndose a pesar de la existencia de datos y testimonios de la violencia y marginamiento que viven ellas.

Aun cuando las normas y prácticas de justicia de los pueblos indígenas pueden tener mejores principios de conservación de los recursos naturales e, incluso, dan cuenta de “buen gobierno” en el territorio, las mujeres indígenas suelen estar atrapadas en roles tradicionales y restricciones propias de la familia patriarcal.

La Asociación de Cusiseras Guarayas, de la comunidad de Yaguarú,²⁶ en el municipio de Urubichá, Bolivia, participaron en las históricas marchas indígenas del largo proceso de saneamiento y del logro de la titulación del territorio colectivo del pueblo Guarayo. Ellas demuestran a la organización indígena -principalmente masculina- que esta apuesta sí se relaciona con el proyecto colectivo, pero, además, con intereses específicos a la seguridad y autonomía de las mujeres, a la vez que a la permanencia en el territorio. Esta asociación de mujeres logró una dotación de tierra al interior del territorio colectivo, no por parte del Estado, sino del gobierno indígena (Herrera, 2016).

A causa de la desigualdad que las mujeres indígenas sufren en el acceso a derechos, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) se ha propuesto impulsar la modificación de estatutos y reglamentos de las organizaciones mixtas, para, así, incorporar a las mujeres como comuneras calificadas. Los contextos comunitarios no siempre son los mejores para reivindicar los derechos de las mujeres. Por ello, contar con territorio y productos, y poder transformarlos para generar ingresos marca una diferencia muy importante para las mujeres indígenas; ellas, al no contar con activos suficientes, deben salir de los territorios para emplearse como fuerza de trabajo en condiciones lamentables en el campo o en la ciudad.

26 Para revisar la historia de esta comunidad, véase: <https://porlatierra.org/casos/26>

6 CONSIDERACIONES FINALES: LOS TERRITORIOS COLECTIVOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS GOBIERNOS PROPIOS

La revisión tanto de las disposiciones legales nacionales e internacionales como de las experiencias concretas de la implementación de las políticas agrarias y territoriales permite observar múltiples formas de gobernanza territorial. Estas son activadas a partir del acceso a la tierra y territorio, de la defensa de las posesiones territoriales sean ancestrales o no, y de la posibilidad de generar una pertenencia propia, un confluir con semejantes por proyectos colectivos y formas de vida similares.

Aunque la población rural suele embarcarse en largos procesos por “asegurar” sus posesiones de tierra o territorios, de acuerdo con el lenguaje y las disposiciones legales, una interpretación pluralista de todas estas normas debería indicar que se respete su estructura institucional y garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales desde el momento en el que una colectividad adquiere un representante y define un proyecto común.

El acceso a la tierra y el territorio para las colectividades y formas organizativas abordadas requiere de un proceso en el que los grupos sociales que sufren mayor desigualdad se constituyan en sujetos colectivos con cada vez mayor protagonismo. En diversos países, se habla de la autonomía indígena. Sin embargo, pocos Estados han constitucionalizado, legislado y reglamentado esta posibilidad para las poblaciones rurales y no solo para los pueblos indígenas, sino para otro tipo de colectividades que pueden sujetarse a los derechos colectivos de conciencia y por una aspiración a mejorar sus condiciones de vida.

Ya se conocen algunos casos en Sudamérica de gobiernos indígenas constituidos, diferentes de los de Norteamérica y Centroamérica. Una estructura social bastante golpeada como la colombiana presenta experiencias desde abajo, que nutren un discurso, un lenguaje y tejidos de pensamiento para los diversos ámbitos de la vida, la economía y la cultura, como la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN, s. f.),²⁷ entre otros territorios que emplean la denominación de lo propio para referirse a sus construcciones sociales y políticas particulares (la justicia

27 Portal electrónico de la ACIN: <https://nasaacin.org/>

propia, la educación propia, el gobierno propio). Y otras legislaciones y estructuras sociales que han cobrado bastante visibilidad, como la boliviana, incorporan largos y burocráticos procesos para que los pueblos indígenas y naciones originarias concreten sus aspiraciones. Aun si estas lo consiguen, se mantienen los mecanismos que reafirman el centralismo estatal, que terminan emulando entidades tradicionales, como los municipios; si no, son presas de formas clientelares con la pretensión de alinear a la población de los territorios a los intereses partidarios a nivel nacional.

Con los ejemplos descritos, hemos demostrado que las formas de existencia de la tierra colectiva y las demandas en curso son un asunto contemporáneo. Además, las movilizaciones campesinas y afrodescendientes deben ser entendidas desde la perspectiva del autogobierno, como una oportunidad para superar las desventajas socioeconómicas y la marginación política. En relación con la amplia desigualdad social y en el acceso al primordial recurso de la tierra y el territorio, este enfoque les otorga autonomía, potestad que el resto de la sociedad -como productores y, principalmente, como consumidores- ha perdido bajo un modelo de vida absorto en la lógica del mercado.

Los gobiernos territoriales, campesinos, indígenas y afrodescendientes están proponiendo formas alternativas de vivir y de gestar las políticas públicas; también están mostrando maneras novedosas de seguir defendiendo los derechos fundamentales y los particulares de las mujeres, los jóvenes y las familias rurales.

Lo menos que pueden hacer las instituciones que trabajan estas temáticas -públicas, privadas y la opinión pública- es aportar con un contexto menos amenazante y violento. De este modo, quienes optaron por estas formas de vida podrán transitar con la energía enfocada en sus aprendizajes y su contribución a los nuevos desafíos que se imponen a la humanidad.

REFERENCIAS

Aguilar, V. (2017). Jurisdicción especial indígena como resistencia del territorio Huottoja “*purināri aje*”. Movimiento Regional por la Tierra y Territorio e IPDRS. Estudios de caso, 161. Disponible en: www.porlatierra.org/casos/161

Alvarado, M. (2017). Comunidad 24 de mayo: mujeres kichwas defendiendo la tierra. Movimiento Regional por la Tierra y Territorio e IPDRS. Estudios de caso, 133. Disponible en: www.porlatierra.org/casos/133

Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). Çxhab Sala Kiwe (Territorio del Gran Pueblo). (s. f.). [página web]. Disponible en: <https://nasaacin.org/>

Bautista, R. (2017). Enfoques de género y prácticas de las mujeres rurales en Sudamérica. La Paz: IPDRS.

Bazoberry, O. (2018). Ruralidad plurinacional y expansión del capital en Bolivia. En B. Rubio (coord.). América Latina en la mirada: las transformaciones rurales en la transición capitalista. Ciudad de México: UNAM, pp. 253-288.

Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca). (2018). Capítulo Bolivia. En R. Bautista, O. Bazoberry y L. Soliz (coords.). Informe 2017. Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica. La Paz: IPDRS, pp. 73-99.

Colectivo Agrario Abya Yala. (2016a). Consejo Comunitario La Alsacia: la lucha constante por la permanencia y defensa del territorio. Movimiento Regional por la Tierra y Territorio e IPDRS. Estudios de caso, 73. Disponible en: www.porlatierra.org/casos/73

Colectivo Agrario Abya Yala. (2016b). Zona de Reserva Campesina de Cabrera. Movimiento Regional por la Tierra y Territorio e IPDRS. Estudios de caso, 70. Disponible en: www.porlatierra.org/casos/70

Comissão Pastoral da Terra. (2019). Caderno de conflitos. Disponible en: <https://www.cptnacional.org.br/downloads/download/4-areas-em-conflito/14141-areas-em-conflito-2018>.

Cué, C. (2017). Benetton y los mapuches, batalla sin fin en la Patagonia argentina. El País. Disponible en: <https://elpais.com/especiales/2017/represion-mapuches-argentina/>

Daza, E. (2016). Asomac: una reforma agraria campesina y solidaria. Movimiento Regional por la Tierra y Territorio e IPDRS. Estudios de caso, 106. Disponible en: www.porlatierra.org/casos/106

Deere, C., Doss, Ch., Grown, C., Oduro, A., y Swaminathan, H. (2011). Las brechas de género en los activos y la riqueza: evidencia de Ecuador, Ghana y Karnataka, India. Bangalore: Indian Institute of Management Bangalore. Disponible en: <https://docplayer.es/13497706-Las-brechas-de-genero-en-los-activos-y-la-riqueza-evidencia-de-ecuador-ghana-y-karnataka-india.html>

Esteban, C. (2017). La Cooperativa Cuchiyaco. Movimiento Regional por la Tierra y Territorio e IPDRS. Estudios de caso, 141. Disponible en: www.porlatierra.org/casos/141

Ferreira da Rocha, Z., y Rocha, V. (2017). Areia Grande: a lua no sertão baiano é pelo Fundo de Pasto! Movimiento Regional por la Tierra y Territorio e IPDRS. Estudios de caso, 163. Disponible en: www.porlatierra.org/casos/163

Ferro, S. L. (2011). La tierra en Sudamérica. Buenos Aires: IPDRS. Disponible en: https://www.sudamericarural.org/images/exploraciones/archivos/exploraciones_8.pdf

García, L. (2018). Recuperación de la territorialidad ancestral comunitaria diaguita. Movimiento Regional por la Tierra y Territorio e IPDRS. Estudios de caso, 179. Disponible en: www.porlatierra.org/casos/179

Giménez, R. (2018). Quilombo y resistencia. El Gran Otro. Disponible en: <http://elgranotro.com/quilombo-y-resistencia/>

Hauck, T. (2015). Soberanía: unidad y solidaridad en la Amazonía. Movimiento Regional por la Tierra y Territorio e IPDRS. Estudios de caso, 54. Disponible en: www.porlatierra.org/casos/154

Herrera, A. (2016). Cusiseras en Yaguarú: palmera con trabajo de mujeres. Movimiento Regional por la Tierra y Territorio e IPDRS. Estudios de caso, 26. Disponible en: www.porlatierra.org/casos/26

Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) (coord.). (2020). Informe 2019. Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica. La Paz: IPDRS.

Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) (coord.). (2019). Informe 2018. Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica. La Paz: IPDRS.

Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) (coord.). (2018). Informe 2017. Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica. La Paz: IPDRS.

Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) (coord.). (2017). Informe 2016. Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica. La Paz: IPDRS.

Lero, T. (2014). Jatun Ayllu Kirkiawi: identidad, territorio y libre determinación. Movimiento Regional por la Tierra y Territorio e IPDRS. Estudios de caso, 27. Disponible en: www.porlatierra.org/casos/27

Montealegre, V. (2016). Proyecto de Asentamiento Emiliano Zapata. Movimiento Regional por la Tierra y Territorio e IPDRS. Estudios de caso, 91. Disponible en: www.porlatierra.org/casos/91

Noningo, Sh. (2017). Autonomía de la nación Wampís: Tarimat Pujut y la construcción del futuro común. Movimiento Regional por la Tierra y Territorio e IPDRS. Estudios de caso, 147. Disponible en: www.porlatierra.org/casos/147

Organización de Naciones Unidas (ONU). (2019). UN Climate Change Annual Report. Disponible en: <https://unfccc.int/sites/default/files/resource/UN-Climate-Change-Annual-Report-2018.pdf>

Organización de Naciones Unidas (ONU). (2018). Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales.

Organización de Naciones Unidas (ONU). (2014). Programa de Actividades del Decenio Internacional para los Afrodescendientes [versión web]. ONU. Disponible en: <https://www.un.org/es/observances/decade-people-african-descent/programme-activities>

Organización de Naciones Unidas (ONU). (2007). Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 13 de setiembre. Disponible en: https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf

Organización de Naciones Unidas (ONU). (2001). Informe de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. Durban, del 31 de agosto al 8 de setiembre de 2001. Disponible en: <https://undocs.org/es/A/CONF.189/12>

Ostrom, E. (2015). El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

Palmer, D, Fricska, S., y Wehrmann, B. (2009). Hacia una mejor gobernanza de la tierra. Documento de trabajo sobre la tenencia de la tierra, 11.

Páñez, A., y Rodrigo, F. (2019). Capítulo Chile. En IPDRS. Informe 2018. Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica. La Paz: IPDRS.

Paredes, M. (2017). La lucha por la tierra del asentamiento Che Jazmin. Movimiento Regional por la Tierra y Territorio e IPDRS. Estudios de caso, 143. Disponible en: www.porlatierra.org/casos/143

Pereira, V., y Dourado, C. (2020). No Brasil pós golpe o agro-hidro-minero-negócio não poupa ninguém. En IPDRS. Informe 2019. Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica. La Paz: IPDRS.

Peters, C. (2016). Comunidade Indígena Pataxó. Aldeia Indígena Barra Velha (Xandó). Movimiento Regional por la Tierra y Territorio e IPDRS. Estudios de caso, 89. Disponible en: www.porlatierra.org/casos/89

Quijano, A. (2011). Colonialidad del poder y clasificación social. Contextualizaciones Latinoamericanas. Revista semestral del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad de Guadalajara, 3(5), pp. 1-33. Disponible en: <https://pdfs.semanticscholar.org/b1d0/d5bf9632917cbac98347253bbb921798855e.pdf>

Reaño, G. (2017). Santa Catalina de Chongoyape rescató sus bosques para recuperar su territorio. Movimiento Regional por la Tierra y Territorio e IPDRS. Estudios de caso, 134. Disponible en: www.porlatierra.org/casos/134

Reaño, G. (2016). Mabosinfron, guardianes del bosque de Alto Purús. Movimiento Regional por la Tierra y Territorio e IPDRS. Estudios de caso, 119. Disponible en: www.porlatierra.org/casos/119

Rights and Resources Initiative. (2015). Who Owns the World's Land? A global baseline of formally recognized indigenous and community land rights. Washington D.C.: RRI.

Rolnik, S., y Guattari, F. (2006). Micropolítica. Cartografías del deseo. Madrid: Traficantes de sueños.

Salas, M. (2004). Desigualdad social: ¿nuevos enfoques, viejos dilemas? En M. Salas, J. Pérez y F. Cortés. Cuaderno de Ciencias Sociales 131. San José: Flacso.

Sánchez, G. (2017). Facundo Jones Huala, el mapuche violento que le declaró la guerra a la Argentina y Chile. El Clarín. Disponible en: https://www.clarin.com/suplementos/zona/facundo-jones-huala-mapuche-violento-declar-guerra-argentina-chile_0_BjneugWvI.html

Santos, A. (2018). Capítulo Perú. En IPDRS. Informe 2018. Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica. La Paz: IPDRS.

Soliz, L., Bazoberry, O., y Vos, V. (2020). ODS y desarrollo territorial: medición experimental en el norte amazónico de Bolivia. La Paz: IPDRS-OXFAM.

Trimano, L. (2015). Integración social y nueva ruralidad: ser ¿hippie? en el campo. Revista Antropología Social, 24, pp. 317-348. Disponible en: <https://revistas.ucm.es/index.php/RASO/article/view/50660>

Wahrren, J., Habad, G., y Palmisano, T. (2019). Capítulo Argentina. En IPDRS. Informe 2018. Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica. La Paz: IPDRS.

Wallerstein, I. (1979). El moderno sistema mundial, tomo I. Ciudad de México: Siglo XXI Editores.

DOCUMENTOS EN ESTE ÁMBITO



Serie editada conjuntamente por ILC y Oxfam

INFORME DE SÍNTESIS

- Uneven ground: land inequality at the heart of unequal societies
Anseeuw, W. and Baldinelli, G.M.

ESTUDIOS DE CASO

- ¿Puede la concentración de la tierra ser fuente de desarrollo? Un análisis de las condiciones y bienestar de trabajadores agroindustriales de la provincia de Virú
Araujo Raurau, A.L.
- Assessing and measuring the gender gap in land rights under Communal Land Associations in Karamoja
Lakidi Achan, P.
- Desigualdades en el acceso a la tierra y la inserción laboral de los nicaragüenses en la agricultura de Costa Rica
Baumeister E.
- Global financial funds, land grabs and the reproduction of inequalities: a contribution from Brazil
Kato, K., Furtado, F., Junior, O.A. and Siviero, J.
- How the Talaandigs regained their ancestral lands in the Kalatungan Mountain Range
Ravanera, R., Verdijo, T.C., and Gualberto, X.M.E.
- La agricultura bimodal en el sector sojero: desentrañando la coexistencia entre pequeños y grandes productores en el oriente de Bolivia
Colque, G. and Mamani, M.I.
- La tierra entre la palma y las flores. Desigualdades y recomposiciones con marcas generacionales y de género en el municipio de María La Baja en Los Montes de María y La Unión, en el Oriente Antioqueño, Colombia
Espinosa Rincón, N. and Jaramillo Gómez, O.E.

DOCUMENTOS CONCEPTUALES

- Gobernanza de la tierra colectiva y su contribución a la reducción de las desigualdades
Bautista Durán, R. and Bazoberry Chali, O.
- Assessing and measuring the gender gap
Scalise, E.
- Unearthing the less visible trends in land inequality
Wegerif, M. and Anseeuw, W.

DOCUMENTOS DE DATOS

- **Global land inequality**
Bauluz, L., Govind, Y., and Novokmet, F.
- **Methodological considerations on land inequality**
Vargas, D. and Luiselli, C.

DOCUMENTOS DE SOLUCIONES

- Acceso a la tierra en el Ecuador desde sus más recientes políticas públicas.
Montesdoeca Chulde, D. and Ramos Bayas, M.
- Beyond accumulation, new approaches to agricultural development in a context of natural resources pressure and climate change
Oberlack, C., Zambrino, L.A., Truong, Q.C; Dang, B.T, Vu, X.V., Blare, T.
- Comment rendre les investisseurs et les compagnies plus respectueuses de l'environnement et des droits de l'homme ? Etude de cas du Cameroun
Nguiffo, S.
- Les régulations des marchés fonciers et de l'usage de la terre: des outils pour réduire les inégalités
Merlet, M.
- Una oportunidad real: impuestos a la tierra
Itriago, D.

NOTAS

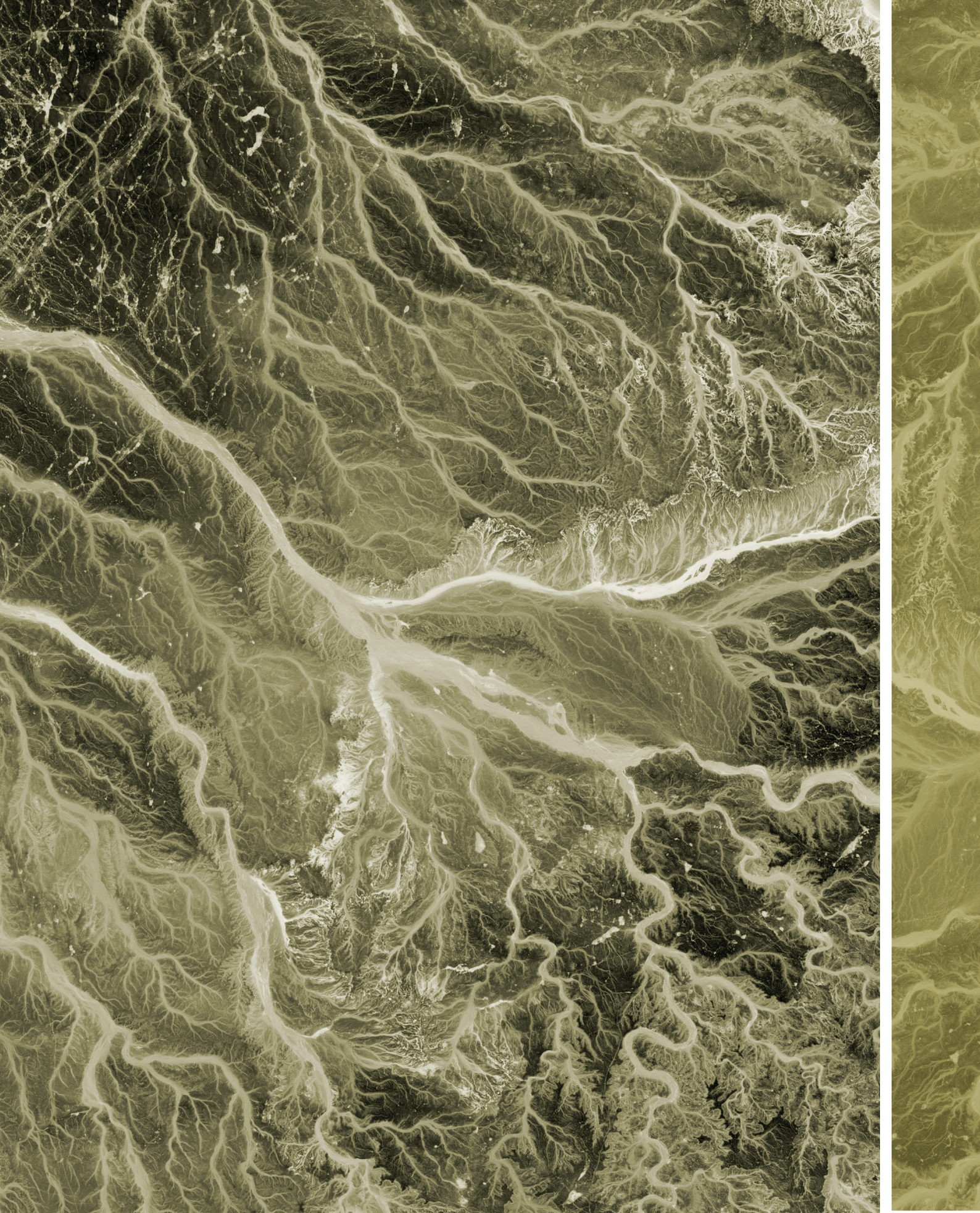
NOTAS

La iniciativa sobre la desigualdad de la tierra

está dirigida por un grupo de referencia informal, compuesto por expertos en el ámbito de la tierra y las desigualdades más amplias.

Los miembros del grupo de referencia proporcionaron orientación y conocimientos especializados a lo largo del proceso e incluyen las siguientes organizaciones:





**INTERNATIONAL
LAND COALITION
SECRETARIAT**

c/o FIDA

Via Paolo di Dono, 44,
00142-Roma, Italia

tel +39 06 5459 2445
fax +39 06 5459 3445

info@landcoalition.org
www.landcoalition.org